

normativo idóneo para el desarrollo armonioso de esta parte de su territorio.

Este desarrollo requiere la toma en consideración de las circunstancias políticas, históricas, geográficas, económicas y sociales que han de fundamentar las bases en que esta Ley se articula para regular la vida económica de la ciudad en los próximos años, atendiendo a los principios constitucionales de justicia, igualdad y solidaridad.

También coincide en esta fundamentación el propio proceso de integración del Reino de España en la Unión Europea, que presenta, en lo que se refiere a la ciudad de Melilla, circunstancias muy diferenciadas respecto del resto del Estado.

Son ambos órdenes de circunstancias lo que imponen la adaptación del régimen económico de la ciudad a las nuevas realidades que configuran hoy el presente inmediato, superando las soluciones normativas que desde 1944 y 1955 han venido rigiendo el devenir socioeconómico de los melillenses, y es en función de aquéllos por los que se promulga la presente Ley.

La parte Primera acomete las normas tributarias, bajo la aspiración de profundizar en un régimen específico para Melilla en el ámbito de la legislación económica y fiscal de España.

Estas especialidades que han configurado la Ciudad de Melilla y que, en su núcleo básico, se pretende mantener, han hecho que su régimen económico-fiscal evolucionara, adaptándose a los diferentes momentos históricos de nuestro país.

La consideración aduanera de Territorio Franco a la totalidad de la superficie de la Ciudad Autónoma, las bonificaciones que existen en la imposición directa, o la no aplicación, en la imposición indirecta, del IVA, son algunos de los caracteres de éste especial Régimen Fiscal.

No obstante, y a partir de la Ley Orgánica 2/95, reguladora del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, se hace necesario un nuevo replanteamiento de la fiscalidad y del entorno económico de Melilla. La potencialización de sectores como el comercio interior y la exportación, el turismo o la industria, junto con la conmemoración del V Centenario de la Ciudad, hacen que se fijen objetivos básicos para los albores del próximo milenio basados en el desarrollo económico y en la creación de empleo.

Evidentemente para la consecución de objetivos económicos uno de los factores a tener en cuenta es el régimen impositivo. Es en ésta línea donde se mueve esta Ley, es decir, en dotar a la Ciudad Autónoma de Melilla de un Régimen Fiscal muy específico y dirigido a la potenciación económica y social, y a la atracción de inversiones.

En consecuencia, la parte Primera de la Ley se estructura conforme a las órdenes aplicables por razón del poder tributario que los hace nacer. Y, así, se recogen, primero, las especialidades de aplicación en

los impuestos estatales directos e indirectos, continuando los procedentes en orden a aligerar la imposición de residentes, de explotaciones económicas y de rentas, bienes y derechos localizables en el territorio; no se olvidan, en este sentido, otras especialidades de naturaleza tributaria procedentes de la legislación común y cuya consideración es ineludible en la ordenación propuesta.

La Parte Segunda, extiende la consideración de la necesidad de bonificar la residencia en Melilla, en orden a compensar las especiales dificultades que ocasiona el hecho de residir en Melilla, tales como los sobrecostos sanitarios y sociales obligatorios conocidos como "plus de residencia", el encarecimiento de costes en la obtención de materias primas o en la distribución de productos en el mercado, etc..., que, producen, en su conjunto, un especial desincentivo a la inversión empresarial y a la consiguiente demanda de trabajo, que es necesario compensar.

La Parte tercera, relativa a las subvenciones al transporte, trata de consolidar y mejorar las que actualmente se vienen aplicando al tráfico de viajeros residentes, compensándolos, en parte, por la extrapeninsularidad y relativo aislamiento de la ciudad.

Finalmente, la Ley considera la creación de un Registro Especial de Buques en la Ciudad, aprovechando sus especiales condiciones geográficas, que será objeto de un posterior desarrollo.

Entre las disposiciones adicionales, se establecen unas condiciones de acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito oficial, al objeto de que sean éstas, mediante la inversión, el medio natural para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los melillenses.

Además, en cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, la Ley modifica la regulación actualmente en vigor, incorporando a Melilla al elenco de entidades beneficiarias de dicho Fondo y estableciendo los criterios y variables a tener presentes en la determinación de los recursos que deba percibir por éste fundamental instrumento financiero al servicio de la solidaridad.

Termina la Ley con sendos mandatos al Gobierno como el relativo a la garantía de adaptación del Régimen Especial, para el supuesto que Melilla se integrara en el espacio aduanero común, y otro, que le encomienda instar a las instituciones comunitarias el reconocimiento para Melilla como región ultraperiférica de la Unión Europea, dada la identidad de circunstancias y problemas entre ésta y dichas regiones.